

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nro.74

SENTENCIA N°: 6999

EXPEDIENTE N°: 4633/2015

AUTOS: "MALLEA ARMANDO RUBEN C/ OSECAC OBRA SOCIAL DE EMLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES Y OTRO S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL"

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2025.

VISTOS:

I- Que a fs. 6/22 se presenta MALLEA ARMANDO RUBEN e inicia la presente acción contra OSECAC OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES y contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. ASOCIART ART SA. en procura del cobro de la suma de pesos que resulta de la liquidación que practica a fs. 21 vta., en concepto de reparación integral de la incapacidad que dice padecer como consecuencia de la enfermedad adquirida de origen laboral.

Relata que comenzó a trabajar bajo la dependencia de la demandada con fecha 12 de noviembre de 1984. Conforme recibo de haberes, revistió la categoría laboral de "Encargado de Tapiceria", en los términos del C.C.T. N° 130/75, cumpliendo horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hs., y este ultimo tiempo, de 07:00 a 15: 00 hs, con una remuneración mensual de \$23.450,20.- .



Sostiene que sus tareas eran de maniobrar pistola neumática, utilización de sierra circular, cepilladora, tupi, todos ellos con el objeto de tapizar los diferentes encargos. Además aclara que el lugar donde se desempeñaba funcionaba una carpintería, taller mecánico e imprenta, por lo que además de trabajar con su propio ruido (sin máscara o instrumentos de seguridad que aplaquen el mismo) soportaba el de cinco y/o seis compañeros suyos.

Afirma que en el mes de noviembre de 2013, comenzó a sentir unos intensos zumbidos en ambos oídos, que se debía que su audición se saturaba después de tanta exposición a las máquinas ruidosas y que en febrero de 2014 le diagnosticaron "Hipoacusia/ perceptiva bilateral", siendo el origen la manipulación en el ámbito de sus tareas, de compresores, sierras, cepilladoras, martillos neumáticos, que le provocaron su incapacidad laborativa.

Asegura que como consecuencia de las patologías que padece presenta una incapacidad del 25,72 % de la T.O. por la que reclama daño material y añade reclamos por daño psicológico y daño moral.

Funda la responsabilidad de la demandada en lo normado por los arts. 1074 y concordantes del Código Civil vigente al momento de los hechos y también practica liquidación en los términos de la acción tarifada de indemnización de daños conforme la ley 24.557 y sus modificatorias.

Le imputa responsabilidad que nace por la omisión que ocasiona un daño, cuando una disposición legal impone a la aseguradora la obligación en materia de seguridad para enfrentar los riesgos o prevenir situaciones como aquellas a las que se hallaba expuesto en virtud de las tareas que desarrollaba para la demandada. Agrega que la ART incumplió sus obligaciones en cuanto al control de la seguridad e higiene en la empresa empleadora demandada y que asegurara, en particular las referidas al control del cumplimiento de las normas de seguridad, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.

Plantea la inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24557 con extensión a la ley 26773, en especial de aquellas que limitan la responsabilidad civil de la aseguradora, ofrece prueba, y solicita el progreso de la acción en todas sus partes con expresa imposición de costas.



II- A fs. 33/43 se presentó PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA, a estar a derecho y contestar la acción.

Reconoce la existencia de un contrato de afiliación con la empleadora del accionante, N° 133544 y que el mismo se encontraba vigente a la fecha de la toma de conocimiento de las enfermedades profesionales.

Opone como defensa la falta de legitimación pasiva pues la LRT establece un procedimiento especial, por cuanto sus únicas obligaciones se circunscriben a las enumeradas en la ley de riesgos de trabajo, resultando improcedente su condena en los términos del derecho civil.

Formula una pormenorizada negativa de los hechos expuestos en el inicio, en especial las condiciones de trabajo descriptas y la forma en que el actor realizara las tareas. Señala que siempre dio cumplimiento con las normas de control, seguridad e higiene.

Sostiene que recibida la denuncia del accidente, brindó al actor las prestaciones médicas correspondientes, y que se determinó que la enfermedad del actor es netamente inculpable.

Contesta los planteos de inconstitucionalidad efectuados por el accionante.

Formula otras consideraciones, impugna la liquidación, ofrece prueba, y solicita el rechazo de la acción con expresa imposición de costas.

III- A fs. 54/58 y vta. se presenta OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) a estar a derecho y contestar la acción.

Solicita para el supuesto desistimiento del actor respecto de la codemandada, se cite como tercero obligado (conf. art. Art. 94 CPCC de la Nación) a PROVINCIA ASEGURADORA DEL RIESGO DE TRABAJO S.A.



Formula la negativa de los hechos invocados, señala que el actor jamás denunció las supuestas lesiones. Reconoce que el actor laboró desde la fecha indicada y niega que producto de las tareas padezca algún tipo de enfermedad.

Contesta los planteos de inconstitucionalidad invocados, impugna la liquidación, ofrece prueba y solicita el rechazo de la citación de terceros.

A fs. 69/75 la parte actora contesta el traslado conferido y ofrece prueba.

En fecha 17/12/2024 t se tiene por acreditado el fallecimiento de actor y el 08/04/2025 se presentan los herederos TANIA MARIA CAETANO MALLEA, RUBEN ADRIAN MALLEA CAETANO, y FERNANDO ANDRES MALLEA CAETANO. Cuestión que no fue objetada por las partes.

CONSIDERANDO:

I- Que tal y como quedara trabada e integrada la Litis, corresponde determinar la procedencia de la acción sobre la base de las pruebas producidas, y de conformidad con lo normado por los arts.377 y 386 del CPCCN.

Del relato de los escritos constitutivos y de las constancias que surgen del proceso, resulta que se encuentra en discusión las dolencias denunciadas por el actor, toda vez que la ART demandada sostiene que mal podría ser responsable por una enfermedad inculpable reclamada, conforme los parámetros de la LRT sin perjuicio de la denuncia de la toma de conocimiento de las enfermedades profesionales (noviembre de 2013).

En tal sentido, le correspondía al accionante acreditar el padecimiento de la incapacidad por la que reclamó, pues sólo de acreditarse la existencia del daño cabría entrar a considerar los demás extremos invocados para concluir si existe en los hechos alguna circunstancia que amerite la imputación de responsabilidad civil a la demandada en los términos de los arts.1074 del Código Civil de Vélez.



II- En primer lugar, analizaré las dolencias físicas invocadas por el actor.

A fin de dilucidar esta cuestión, el perito médico designado en autos presentó su informe a fs. 138/151. En el mismo indica que de la realización del examen físico y estudios complementarios efectuados (que describe detalladamente en la pericia), el accionante presenta: *Luego de tener vista del expediente, y realizar el examen clínico del actor puede concluir que el actor MALLEA ARMANDO RUBEN padece un cuadro de hipoacusia perceptiva bilateral, que le genera una incapacidad del.... 12,3 %, reacción vivencial anormal neurótica depresiva que le genera una incapacidad del 8. 77 % con más factores de ponderación (tipo de actividad: 10% y edad: 1%), con un tomáquinas ruidosas, tal del 24,17 % de la T.O.. Según BAREMOS LEY 24557. DEC 659/96.*

Señalo que la presente pericia no ha merecido impugnación alguna de las partes, pese a encontrarse debidamente notificadas en fecha 06/11/2018, por lo que considero que las patologías que padece el actor guardan relación causal con las tareas que invocó y que realizaba para la patronal (art. 386 y 477 CPCCN).

III- Por otra parte, de la prueba testimonial producida en autos surge que el actor efectivamente realizaba tareas en las condiciones descriptas, en particular, el deponente corrobora el ambiente ruidoso en que debía efectuar cotidianamente las tareas el actor.

Así, el testigo SAIRE DANIEL RUBEN D.N.I. 13.104.494 (20/02/2020) a fs. 174, dijo que el actor ingresó a trabajar en el año 1983 o 1984, que realizaba tareas propias de tapicero en un taller de carpintería y tapicería ubicado en el fondo de un edificio bastante amplio rodeado de talleres de distintos oficios ubicados todos en un mismo sector. Señaló que el taller de herrería tenía máquinas ruidosas, las que podían estar prendidas todas juntas generando mucho ruido y, que debido a ello no se podía hablar de forma normal. Refirió que trabajaba manteniendo un contacto directo con el actor, que nunca se enteró de algún control por parte de la ART y que los carteles de seguridad eran mínimos.



Señalo que dicho testimonio –que no fue cuestionado por las accionadas - tiene plena fuerza convictiva y acredita la modalidad en el que el actor realizaba sus tareas en un ambiente ruidoso.

Digo ello, toda vez que la declaración de Saire se encuentra objetivamente fundada, proviene de una persona que dijo haberse desempeñado para la accionada y haber sido compañero de trabajo del actor en dicho lugar, es decir, corrobora además la relación causal entre las tareas desempeñadas y las patologías que padece, tal como refirió el perito médico en su informe (arts. 385 y 456 del C.P.C.C.N. y art. 90 de la L.O.).

Ahora bien, considero que la aseguradora no demostró haber adoptado las medidas legalmente establecidas para prevenir eficazmente los riesgos laborales del caso, ni que hubiera denunciado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos en que incurriera la empleadora, ni que le hubiere brindado asesoramiento y ofrecido asistencia técnica para determinar la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, conforme le es exigido legalmente. Asimismo, cabe colegir que la pericia técnica fue de imposible cumplimiento, en tanto la empleadora no puso a disposición la documental necesaria para cumplimentar la manda judicial, motivo por el cual considero la accionada no probó la falta de responsabilidad que alega en el conteste (ver providencia 29/04/2025).

En tales condiciones, he de recordar que el art. 1074 del Código Civil – el cual se hallaba aún vigente en la época en la que sucedieron los hechos que aquí se juzgan- contemplaba la responsabilidad que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley impone una obligación. En ese marco y a partir de lo dispuesto en los preceptos antes citados, puede afirmarse que si la aseguradora no cumplió las medidas preventivas necesarias, incurrió en una conducta culposa (cfr. arts. 512 y concordantes del citado código), que hace nacer su responsabilidad frente al perjuicio que se deriva de la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo tanto y toda vez que, según creo, por las razones ya explicadas, la omisión de adoptar elementales medidas de seguridad y de prevención, en el



caso, obró como causa adecuada del daño ocasionado a la actora, estimo válido concluir que en el presente litigio existen elementos suficientes para hacer responsable a las A.R.T., pues ésta, conforme a la normativa mencionada precedentemente, cargaba con la obligación de diagnosticar y de controlar la implementación de medidas de seguridad tendientes a reducir la siniestralidad laboral. La omisión de tales deberes, a mi modo de ver y a partir de los razonamientos expuestos, guarda nexo adecuado de causalidad con los daños sufridos por la demandante (cfr. arts. 901, 902, 904, 1074 y conchs., Cód. Civil), desde que, según estimo, de haberse observado el comportamiento positivo impuesto por el orden jurídico, se podría haber interrumpido el proceso causal y, por ende, evitado el resultado dañoso. Es que, conforme lo establecía el art. 902 del Código Civil, “cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”, consecuencias que, según lo dispuesto por el art. 904 del mismo ordenamiento legal “...son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas”. Sobre el punto se ha indicado que “...ante el reclamo de reparación integral del trabajador accidentado con fundamento en los arts. 1109 y 1074 del Código Civil, procede condenar a la A.R.T. con fundamento en el último artículo citado por incumplir las obligaciones de prevención, control y asesoramiento que le imponen los arts. 4 y 31 de la L.R.T. y normas pertinentes del decreto reglamentario N° 170/96, cuyo cumplimiento habría evitado los siniestros. Se trata de un supuesto de responsabilidad por omisión de un deber legal, donde se le reprocha al agente el no haber adoptado una conducta que le resultaba jurídicamente exigible y que, de haber sido cumplida, hubiese evitado o disminuido la posibilidad del daño. Para que tal responsabilidad proceda es además menester que la conducta omisiva guarde un nexo de causalidad adecuado con la producción del daño. Así lo ha entendido la doctrina al sostener que la omisión resulta causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado y que el nexo de causalidad se establece juzgando la incidencia que el acto debido de realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti Ricardo L. “Notas sobre la responsabilidad civil por omisión, Zeus, t. 33 -D. p 55).



No soslayo las tareas desarrolladas y descriptas por el trabajador a lo largo de relación laboral para su empleadora, y, en este contexto, es lógico que las enfermedades denunciadas, actúen como “reveladoras” de patologías que se vinculan con el trabajo, pero que -justamente por la falta de prevención y análisis de riesgos- se vea el actor afectado en su salud.

Por si no se compartiera nada de lo hasta aquí expuesto, debo agregar que aún si cupiera alguna duda acerca de la vinculación de las dolencias con el trabajo y la consecuente responsabilidad de la aseguradora demandada, la directriz impuesta por el art.9 de la L.C.T., zanjaría toda cuestión, pues no cabría más que interpretar la prueba en el sentido más favorable al trabajador teniendo, consecuentemente, por acreditada la vinculación entre ellas y las precisas dolencias informadas por el perito.

En suma, estimo que PROVINCIA ART SA. debe responder, por los perjuicios ocasionados a la actora y que se han acreditado en el presente proceso.

En síntesis, analizados todos estos elementos a la luz de la sana crítica, concluyo que efectivamente el actor padece de una incapacidad física parcial y permanente del orden del 24,17 % de la T.O. como consecuencia de las dolencias al realizar sus tareas -que implicaban la exposición a un ambiente ruidoso-, todo ello, en el transcurso de toda la jornada laboral y durante varios años, conforme ha quedado demostrado en autos.

IV- En este contexto, la parte actora impugnó la validez constitucional del art. 39 inc. 1) de la ley 24557, en cuanto veda el acceso a la reparación integral -limitado sólo al supuesto en que el empleador incurre en un acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro (art. 1072 del Código Civil)-, y establece un sistema indemnizatorio lesivo de distintos derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

Determinada la existencia de una incapacidad que no ha sido indemnizada, cobra efectividad la doctrina emanada de nuestro más alto tribunal en las causas “Silva Facundo Jesús c/Unilever de Argentina SA, del 18.2.07, y “Aquino Isacio



c/Cargo Servicios Industriales SA”, del 21.9.04. En ellos la CSJN sostuvo que la incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene valor indemnizable. Asimismo el art.19 de la CN sienta el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero – alterum no laedere-, que se halla entrañablemente vinculado a la idea de reparación; a lo que se añade que la responsabilidad que fijan los artículos 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el citado principio general, de manera que la reglamentación que hace dicho código en cuanto a personas y responsabilidades no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que manifiesta un principio general que regula cualquier disciplina jurídica.

Así, corresponde aplicar lo normado por el art. 1113, párrafo segundo del Código Civil., al riesgo de la actividad desarrollada, en cuyo marco tuvo lugar la prestación de tareas del actor, como operario realizando tareas descriptas en el inicio a favor de la empleadora OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES OSECAC, creado por las cosas (máquinas ruidosas, en que la demandada es dueña o guardiana), bajo las directivas y en las condiciones de prestación de tareas impuestas por la empleadora, y que en su conjunto constituyó una actividad riesgosa, que ha generado un daño en la salud psicofísica del trabajador, que debe ser resarcido. Asimismo, el dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son sólo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Por lo que tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto y el daño físico reconocido así como la índole de las secuelas sufridas por el actor, corresponde también hacer lugar al reclamo en concepto de daño moral (ver, en sentido análogo, CNAT Sala VI Expte N° 6.660/10 Sent. Def. N° 63.111 del 15/07/2 011 “Almirón, Ángel Luis c/ El Cóndor ETSA y otro s/ accidente – acción civil”).

En este punto, no debe soslayarse que al promulgarse la ley de riesgos de trabajo, se tuvo en mira, más allá de la reparación del daño, un sistema de prevención para evitar la producción del mismo, que abarca desde antes de éste y hasta la rehabilitación y re-colocación profesional del trabajador, señalándose éstas como ventajas del sistema especial determinado por la norma mencionada (art.1),



que se regirán por esta LRT y sus normas complementarias y establece como sus objetivos: reducir la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; reparar los daños de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados; y promover la negociación colectiva laboral, para mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Crea un sistema de seguro obligatorio o de autoseguro, a cargo de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo con fines de lucro o a cargo del propio empleador –reuniendo los requisitos de solvencia económica requeridos por la norma respectivamente (art. 3 y 26).

Sin embargo, todo este sistema, en su fase reparadora, requiere que -al margen del cumplimiento de las tareas de prevención a cargo de la ART que, en cuanto a los riesgos en la hipoacusia del operario, la aseguradora reciba la denuncia del accidente o de la enfermedad vinculada con el trabajo a través del empleador o del propio trabajador damnificado, circunstancia que, en el caso, inhiben la posibilidad de hacer responsable a la aseguradora en los términos en que se ha demandado.

Conforme lo sentado, concluyo que en el caso de autos no se cumplió con los objetivos perseguidos por la legislación especial aludida. Digo ello, puesto que no solamente no hubo una reparación en forma integral del daño sino que tampoco se cumplió con el sistema de prevención tendiente a evitar que sucedieran las enfermedades padecidas y que abarcaba desde antes de la producción del daño hasta la rehabilitación y recolocación profesional del trabajador.

Por otra parte, ha de meritarse que la mera condición de trabajador que sirve como dato diferenciador, puesto que constituiría un agravio al art. 16 CN, porque se conferiría un trato desigual a situaciones iguales, toda vez que la calidad aludida no puede en ningún caso, constituir un elemento que justifique discriminación; se puede sostener también y aún tomando sólo un punto de vista netamente económico, que debe tenerse en cuenta que la base de la fortuna y riqueza de un país reposa en gran parte en el aporte que a la misma hacen los trabajadores de su fuerza de trabajo al proceso productivo total; así y aún, desde esa restringida óptica, la desprotección que podría legitimarse también aparece no



razonable, temeraria y contraria a derecho. Tiene extrema relevancia lo dispuesto por el art.14 bis de la CN al establecer que el trabajo gozará de la protección de las leyes. En síntesis, podría afirmarse que la condición de trabajador dependiente sólo podría eventualmente ser considerada por el legislador para mejorar la situación legal de aquéllos frente a las demás personas en una situación determinada pero jamás para empeorarla.

Conforme lo hasta aquí sentado, estimo que la veda al acceso a la vía civil impuesta por el art. 39 ley 24557 se presenta en el supuesto de autos, como violatoria de la garantía de igualdad impuesta por el art. 16 CN, atentatoria de la protección que las leyes deben brindar al trabajador, protección que abarca sin lugar a dudas, los perjuicios derivados de su desempeño como tal en la actividad llevada a cabo por el principal.

Lo expuesto no implica que no deba responder en modo alguno, pues ha quedado demostrada la existencia de una enfermedad incapacitante vinculada con el trabajo, respecto del cual la aseguradora deberá responder en la medida del contrato que la vinculara con la empleadora.

De este modo, corresponde establecer el monto de la indemnización que le corresponde al trabajador.

A los fines del cálculo de la liquidación correspondiente y atento que no se produjo la prueba pericial contable y no obran en autos planilla de AFIP, estaré al ingreso base mensual que surge del inicio.- No pierdo de vista que la demandada impugnó el salario denunciado al momento de contestar la demanda, pero lo cierto es que lo hizo en forma general y sin determinar cuál era, según la misma, el monto de dicho concepto, sumado que tampoco produjo prueba alguna tendiente a determinar y fijar el ingreso base mensual que consideraba debería ser tenido en cuenta. Atento ello, por aplicación de lo dispuesto en el art. 56 de la LCT y a falta de prueba, estaré a la remuneración de \$23.450,20.- denunciado por el accionante en el escrito de inicio.

Consecuentemente, tendré en cuenta la edad del actor al momento de toma de conocimiento de las afecciones (noviembre de 2013, esto es 63 años), su



incapacidad del 24,17% de la TO, y una remuneración de \$23.450,20.- (denunciado por el accionante en el escrito de inicio y conforme arts.56 L.C.T. y 56 L.O.).

De este modo, corresponde establecer el monto de la indemnización que le corresponde al trabajador.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo resuelto por la CSJN en la causa “Arostegui”, al actor le corresponde una reparación por daño material de \$ 684.730,43.-, con más un daño moral de \$ 136.946,08.-, lo que totaliza un resarcimiento integral de \$821.676,51.-, importe determinado a la fecha que he considerado como de “toma de conocimiento” (noviembre de 2013).

Este monto será soportado solidariamente por las codemandadas OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES OSECAC, y PROVINCIA ASEGURADORA DEL RIESGO DE TRABAJO S.A., teniendo en cuenta para ello que he tenido por probado que fue el incumplimiento del deber de control de la ART respecto de los incumplimientos del deber de seguridad de la empleadora, lo que terminó causando el daño que estoy ordenando indemnizar, máxime cuando el resultado del cálculo efectuado en los parámetros de la LRT, resultaría en una suma exigua con relación al monto que arriba determiné para el pago de la indemnización (\$309.935,89, que resulta de la fórmula: $53 \times \$23.450,20 \times 65/63 \times 24.17\%$).

V.- Con relación al modo en que debe incrementarse el monto histórico del reclamo arriba determinado, no puedo pasar por alto lo resuelto por la CSJN en las causas “Oliva” (Fallos 347:100), y “Lacuadra, Jonatan Daniel c/DIRECTV Argentina S.A. y otros s/despido”, esta última de fecha 13.8.2024.

En el primero de los precedentes citados, la CSJN descalificó por arbitraria el sistema de capitalización periódica sugerido por la Excma. CNAT en el Acta nro.2764, mientras que en el segundo, hizo lo propio respecto al Acta 2783/2024.

A la luz de los precedentes citados, y pese al criterio del suscripto en cuanto al concepto de “deuda de valor”, es evidente que nuestro más alto tribunal sigue con la postura “nominalista”.



Tal como lo sostiene Federico Alejandro Ossola (en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, AAVV, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, To.V, página 136, Rubinzal Culzoni Editores, 2015) *“aunque pueda reconocerse que la pérdida del poder adquisitivo del dinero que debe ser entregado al acreedor forma parte del “interés” a abonar, un largo camino de depuración conceptual (producto de las recurrentes crisis económicas de nuestro país) llevó finalmente a considerar que jurídicamente los intereses y la actualización monetaria son rubros ontológicamente diversos. Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene dicho desde hace muchos años que la actualización monetaria no aumenta la deuda, sino que se limita a recomponer los valores de la prestación debida. Esto es: integra la “cuenta” del capital adeudado, y no la “cuenta” de los intereses. En consecuencia, los intereses constituyen un rubro distinto de la actualización monetaria que en principio debieran mandarse a pagar por cuenta separada. La cuestión adquiere ribetes particulares en el marco de un sistema nominalista, como es el nuestro, al estar vedada la actualización por la vía directa. Desde los comienzos de la vigencia de la convertibilidad, en el art.8º, 2º párrafo, del decreto 529/91(agregado por el dec. 941/91), se dispuso que “en oportunidad de determinar el monto de la condena en australes convertibles, el juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1º de abril de 1991, de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia”. Se trata, en definitiva, de un mecanismo indirecto de actualización, mediante el incremento de las tasas de interés. Son varias las razones que llevan a tal solución, pero la más evidente es la intención de proscribir el empleo indiscriminado de los mecanismos de repotenciación de deudas”.*

De lo que se trata, entonces, es de encontrar una tasa de interés que, una vez aplicada, sirva para compensar el envilecimiento de la moneda y, también, para castigar la mora del deudor, pues tales son los fundamentos disímiles conceptualmente entre interés “compensatorio” (el debido por el uso de un capital ajeno) y “moratorio” (el debido por el incumplimiento en término del deudor).

En los casos de créditos laborales, es indudable que nos encontramos ante obligaciones de naturaleza alimentaria, pues hace al sustento de las personas que trabajan. Por tal motivo, a la hora de establecer una tasa de interés, cabría estar a lo normado por el art.552 del Código Civil y Comercial que establece: “Las sumas



debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”.

Así, la tasa de interés que los bancos cobran a sus clientes es la denominada Tasa Activa, que fuera sugerida por nuestra Excma. CNAT en el Acta 2658.

Pero como la norma arriba transcripta ordena adicionar una tasa, corresponde determinar qué tasa será esta.

A tal efecto, tendré en cuenta las disposiciones del [“TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO”](#) del Banco Central de la República Argentina, en cuyo art.2.1.2 establece que “La tasa no podrá superar en más del 25 % al promedio de tasas del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que publique mensualmente el BCRA, elaborado sobre la base de información correspondiente al mes anterior teniendo en consideración lo previsto por el punto precedente”. Asimismo, el mismo [BCRA informa](#) que, en operaciones con tarjetas de crédito “la tasa de interés punitivo no podrá superar en más del 50% a la tasa de interés compensatorio que el banco aplique por la financiación de saldos de tarjetas de crédito”.

Sobre estas bases, teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador, el monto de condena devengará intereses desde la fecha de su exigibilidad desde la fecha (**noviembre de 2013**) - a la tasa de interés Activa (conforme Acta 2658), incrementada en un 37,5%, los que se capitalizarán a la fecha de notificación del traslado de la demanda- **11.05.2017** ver fs. 168. El monto resultante, seguirá devengando intereses a esta tasa (Activa – Acta 2658 incrementada en un 37,5%) hasta el efectivo pago, y sin perjuicio de la oportuna aplicación, en su caso, de lo normado por el art.771 del CCCN.

La metodología para el cálculo, entonces, será la siguiente: al monto de condena se le calcularán intereses conforme el Acta 2658 de la Excma. CNAT y empalmes anteriores (tasa Activa), hasta la fecha de notificación de la demanda. El monto de intereses resultante se incrementará en un 37,5%. Este monto total de



intereses (tasa activa incrementada en un 37,5%), se sumará al importe del capital original. El monto resultante (monto de condena + intereses Tasa Activa incrementados en un 37,5%), llevará intereses a la tasa dispuesta (Tasa Activa incrementada en un 37,5%) desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago.

Omito valorar el resto de las pruebas rendidas en la causa por no considerarlas esenciales ni decisivas para la resolución del litigio (conf. art.386 CPCCN).

V- No encuentro motivos para apartarme del principio general de la derrota, por lo que las costas serán impuestas a la demandada vencida OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) (cfr. art 68 CPCCN) a excepción de las costas respecto a la codemandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, que se imponen por su orden.

Para las regulaciones de honorarios tendré en cuenta el mérito y extensión de las tareas realizadas, como así también lo normado por las leyes arancelarias vigentes.

Omito valorar el resto de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por no considerarlas esenciales ni decisivas para la resolución del litigio (conf. art.386 del CPCCN).

Por todo lo expuesto, constancias de autos y citas legales que resultan de aplicación, **FALLO:** 1º) Hacer lugar a la demandada en los términos del reclamo por acción civil , monto que será soportado solidariamente por la demandada OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, a que dentro del quinto día de quedar firme la liquidación a practicarse en la oportunidad prevista por el art.132 de la L.O., le abonen a los herederos de MALLEA ARMANDO RUBEN, SRES: TANIA MARIA CAETANO MALLEA, RUBEN ADRIAN MALLEA CAETANO, y FERNANDO ANDRES MALLEA CAETANO la suma total de \$ 821.676,51.- (PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS), con más la actualización y los intereses; 2º) Imponer las costas en la forma dispuesta en el considerando precedente, y regular los



honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora, la suma de \$ 2.124.075.- (PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO a 25 UMAs), a la representación letrada de la demandada \$ 1.699.260.- (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA, lo que equivale a 20 UMAs), a la representación letrada de la demandada \$ 1.699.260.- (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA, lo que equivale a 20 UMAs), los del perito médico legista \$ 1.019.556 - (PESOS UN MILLÓN DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS, lo que equivale a 12 UMAs) y los del perito ingeniero \$ 509.778.- (PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO, lo que equivale a 6 UMAs), a cada uno de los peritos médico, e ingeniero; en todos los casos conforme Acordada CSJN nro.580/2025, por las tareas realizadas con relación al reclamo civil y con más el I.V.A. en caso de corresponder; 3°) Imponer a la demandada vencida, de acuerdo a lo normado en el último párrafo del artículo 13 de la ley 24635, el reintegro al fondo de financiamiento del artículo 14 de dicha norma, del honorario básico abonado al conciliador.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, con citación fiscal, archívese.

